

Hugo Cabieses, economista, director de Desarrollo Rural Integral Sustentable (DRIS) y asesor parlamentario, revisa en una primera nota el tema de la organización cocalera, y, en el recuadro que sigue, los logros y ambigüedades que surgen luego de la promulgación del decreto supremo 044-2003-PCM.

Organización de los cocaleros: Pocos pero significativos

Hugo Cabieses

Un error importante de los proyectos de "desarrollo alternativo" ha sido concebir que la selva alta es un espacio vacío y con escaso o destruido tejido social debido a la violencia de los ochenta, lo que los ha llevado a ingresar en las diversas cuencas con proyectos para "construir institucionalidad social y empresarial" creando paralelismo.

Esta percepción no es cierta; existe más bien un nutrido tejido social organizativo que se expresa en asociaciones indígenas, asociaciones gremiales de colonos, cooperativas, empresas comunales, comités de productores por actividad, rondas campesinas, comités de autodefensa, clubes de madres, comedores populares, comités de crédito, asociaciones de productores y federaciones de diverso tipo.

En cuanto al movimiento cocalero, este tiene varios años de organización y está articulado a tres niveles: internacional, nacional y por cuencas. No obstante, aún no se ha escrito la historia ni se ha



descrito la organización y problemática de este movimiento, pero algunos rasgos recientes son los siguientes:

A escala *internacional* existe el Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca (CAPHC), fundado en La Paz en marzo de 1991, pero está paralizado desde 1998. Desde 1995 su presidente es Evo Morales, de Bolivia, pero

integran la directiva otros dos bolivianos y dirigentes del Perú —Genaro Cahuana de Quillabamba, Francisco Barrantes del Apurímac-Ene, Dimas Coronado de Yanatile y Moisés Arista de Tingo María— y Omaira Morales del Guaviare, Colombia.

El CAPHC ha realizado tres encuentros internacionales en La Paz (marzo de 1991), Cusco

(mayo de 1993) y Quillabamba (octubre de 1995), ha expuesto cuatro veces en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena (1993 a 1997) y ha realizado seminarios, talleres de capacitación y reuniones en varios países y oportunidades, pero la última se realizó en Puno en mayo de 1998. No se reúne desde esa fecha, pero dos dirigentes —Francisco Barrantes y Omaira Morales— asistieron a la Asamblea General Especial de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS, Nueva York, junio de 1998), en la que el CAPHC se manifestó por lo siguiente:

- Rechazar el tráfico ilícito de drogas, pero también la "guerra contra las drogas" y la militarización por ser instrumentos ineficaces.
- Eliminar el sistema de "certificación" porque viola la soberanía de los países, socava las democracias y no toma en cuenta la opinión y propuestas de las sociedades civiles.
- Cambiar la visión sobre las drogas, distinguiendo coca de cocaína, productor de coca de traficante y consumidor de coca de drogodependiente.
- Promover la exclusión de la hoja de coca de la lista I de estupefacientes de la ONU y revalorar sus usos tradicionales e industriales benéficos.
- Buscar cambios sustanciales en las políticas neoliberales y en el comercio internacional.

- Promover la participación de las comunidades en la elaboración de los programas de desarrollo.

A escala *nacional*, luego de varios intentos anteriores en el Cusco (1979), Tingo María (1984) y Tocache (1989), en febrero de 1998 se fundó en Lima la Coordinadora Nacional de Productores Agropecuarios (CONAPA-Perú) de las cuencas cocaleras del Perú con ocho federaciones y asociaciones que agrupaban a aproximadamente 56 000 productores. Asimismo, se afilió una organización nativa (OARA: Asháninkas del Río Apurímac) y cuatro asociaciones de mujeres campesinas (Apurímac-Ene, Tingo María, Uchiza y Monzón). La CONAPA-Perú realizó tres encuentros nacionales pero no articuló sus propuestas al resto del movimiento campesino nacional. Las cuencas más organizadas son las siguientes:

- La Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares (FEPCAYL), con 12 000 afiliados.
- La Federación Distrital de Campesinos de Yanatile (FEDICAY), que está afiliada a la Federación Provincial de Campesinos de Calca y a la que están afiliados 3000 agricultores.
- La Federación de Productores Agropecuarios del Valle del Río Apurímac y Ene (FEPAVRAE), de aproximadamente 12 000 afiliados.

- La Asociación de Agricultores y Productores de Hoja de Coca del Alto Huallaga, Monzón y Padre Abad (AAPHC-CAHMPA), de Tingo María, con no menos de 20 000 afiliados.

- La Asociación de Productores Agropecuarios del Valle del Monzón (APAVM), con 2000 afiliados.

- El Frente de Defensa de la Erradicación de la Hoja de Coca del Alto Huallaga (FEDECAH) en Uchiza, con 5000 afiliados.

- La Asociación de Productores y Agricultores de Hoja de Coca de la Selva de Puno (APCOCAS) en el valle del Alto Inambari, que cuenta con 2000 afiliados.

La CONAPA-Perú realizó su Primera Convención entre el 17 y el 19 de febrero de 1998, y en ella los delegados eligieron como presidente a Carlos Francisco Barrantes del Apurímac-Ene. No obstante, con la instalación de la Mesa de Diálogo a fines del 2000 en Tingo María, la CONAPA comenzó a languidecer hasta su práctica desaparición.

Posteriormente, con las huelgas y marchas del 2002, los agricultores cocaleros se articularon y fortalecieron nuevamente y, en torno del liderazgo de Nelson Palomino del Apurímac-Ene, Nancy Obregón de Puerto Pizana-Tocache y Flavio Sánchez de Aguaytía, en un Encuentro Nacional

realizado en Lima, fundaron, el 20 de enero del 2003, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) que, dirigida principalmente por mujeres, realizó la reciente marcha a Lima. La CONPACCP agrupa aproximadamente a 15 500 agricultores cocaleros de los siguientes valles: Apurímac-Ene (11 000 afiliados), Alto Huallaga-Uchiza (2000), Alto Huallaga-Puerto Pizana (1500), Alto Huallaga-Aucayacu (3000), Alto Huallaga-Tingo María (3000), Aguaytía (1200), Pichis-Palcazu (1000), Monzón (2500) y Jaén San Ignacio (260). Sin embargo, en la CONPACCP no están afiliados aún los agricultores cocaleros, colonos o nativos de Quillabamba (12 000), Yanatile (2000), Sandía (2000), Huallaga Central (500), Bajo Huallaga (300), Alto Marañón (2000), Moche-Chicama (300) y Bajo Urubamba (1000).

Los agricultores de la selva alta que no cultivan coca son aproximadamente 200 000 y están organizados en asociaciones indígenas (20 000), cooperativas cafetaleras (70 000), cacaoteras (30 000), arroceros (50 000), maiceros (30 000), tealeros (2000), palmicultores (5000), ajonjolí (1000) y barbasqueros (1000), asociaciones de ganaderos (10 000), comités de productores por rubro —palmito, piña, plátano, frutales, etcétera— (10 000) y organizaciones de madereros (5000).



De acuerdo con lo anterior, el movimiento cocalero propiamente dicho es numéricamente reducido, pero su importancia cualitativa ha sido demostrada en las últimas huelgas y marchas. Finalmente, la dinámica social-productiva de la selva alta en los últimos años ha estado centrada en cuatro productos principales:

- *coca*, con aproximadamente 50 000 productores y 60 000 hectáreas sembradas de las siguientes cuencas: Alto Huallaga, Aguaytía, Monzón, Apurímac-Ene y Quillabamba;
- *café*, con alrededor de 80 000 productores y 130 000 hectáreas sembradas en las

siguientes cuencas: Quillabamba, Chanchamayo, Alto Mayo, Apurímac y Sandía;

- *arroz-maíz*, con no menos de 100 000 productores y 100 000 hectáreas sembradas, asentados en el Alto y Bajo Mayo y en el Huallaga Central; y,

- *maderas*, con alrededor de 5000 madereros asentados en Aguaytía, Pucallpa, Tarapoto y Madre de Dios.

Es probable que en los próximos meses estos contingentes sociales se sumen a las movilizaciones de otros sectores rurales del país que están luchando contra las políticas neoliberales que empobrecen al campo. ▲

Agricultores cocaleros: Logros y ambigüedades

El decreto supremo 044-2003-PCM, promulgado por el presidente Toledo el 24 de abril, no fue un acuerdo tomado con los cocaleros que marcharon a Lima el mes pasado, sino una criollada más. Así lo sienten los dirigentes y sus bases, por lo que el 26 de abril enviaron una carta al Presidente diciendo que habían sido engañados y que presentarían una propuesta alternativa.

Los dirigentes Nancy Obregón, de Tocache; Flavio Sánchez, de Aguaytía; Marisela Guillén, de Apurímac-Ene, y Antonio Huamán, de Tingo María, sostienen que el doctor Solari, primer ministro, y el ingeniero Ericsson, presidente de Devida, se han dejado presionar por Estados Unidos, pero confían en que el presidente Toledo solucionará sus demandas "porque ha sido pobre y está en la Presidencia gracias a nosotros". Han solicitado un nuevo diálogo directo y concedido un plazo de treinta días para reiniciar sus luchas si no son atendidos. El plazo se cumplió el 26 de mayo, día en el que tuvieron una reunión en Lima y decidieron dar un plazo adicional para no causarle más problemas al gobierno de los que tiene con el SUTEP y con los trabajadores del agro.

Con su marcha de abril los cocaleros consiguieron tres asuntos importantes: 1) que su confederación fuera reconocida como interlocutora válida; 2) que la opinión pública y los medios de comunicación entendieran que no son delincuentes ni terroristas; y, 3) que fueran recibidos y escuchados directamente por Toledo. Sin embargo, los problemas básicos que buscan resolver son: 1) garantizar el cumplimiento

de las actas del 2002, sin nuevas "mecidas"; 2) libertad de Nelson Palomino y cese de juicios a los otros dirigentes; 3) cese temporal de la erradicación forzosa y su cambio por una reducción gradual y concertada; y, 4) participar en la elaboración de la nueva ley de coca, previo estudio independiente sobre uso legal y reempadronamiento de productores a través de ENACO.

Los agricultores tienen una plataforma que puede ser resuelta, pues existen los recursos para ello; pero el gobierno no tiene la suficiente independencia de Estados Unidos para hacerlo. La plataforma de once puntos fue tomada con displicencia por el doctor Solari en la reunión del 23 de abril. Con el apoyo del ingeniero Ericsson, el primer ministro les dijo que "ya está todo solucionado y no entendemos por qué marchan y hacen huelgas".

Como con los transportistas, maestros y agricultores de otras zonas, el gobierno ha buscado dos cosas: dividir a la confederación del resto de agricultores negociando con cada cuenca por su lado —dizque por "razones técnicas"—, y deslegitimar sus propuestas diciendo que están manipulados por políticos, terroristas y narcos.

El gobierno debería entender que se trata de un sector de agricultores pobres que buscan ser ciudadanos y tienen derecho a serlo, que no son antigobiernistas, que tienen esperanza en Toledo, por quien votaron, y que están hartos de que los burócratas y las ONG se burlen de ellos y quieran imponerles desde afuera y desde arriba políticas con las que no están de acuerdo. ▲